

Anexo 201029-08

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE EL QUE SE EMITE EL NUEVO REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA.

---Culiacán Rosales, Sinaloa a 29 de octubre de 2020.

ANTECEDENTES

---I. El artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artículo 41 Constitucional, señala que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la Constitución.

---II. El artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su décimo párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

---III. Que por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria Icela García Cuadras, Óscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto.

---V. Mediante acuerdo IEES/CG105/18 de fecha 18 de noviembre de 2018, quedó integrada la Comisión de Quejas y Denuncias a que se refiere la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa así como el artículo 43 inciso a) del Reglamento Interior del IEES, de la siguiente manera: Mtra. Gloria Icela García Cuadras como Titular e integrantes Mtra. Perla Lyzette Bueno Torres y Lic. Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez.

---VI. El Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG017/15, en sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2015, aprobó el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; y,

CONSIDERANDO

---1.- El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización de las elecciones es una función estatal,

que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y la ciudadanía.

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.

---2.- El artículo 3 fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

---3.- El 13 abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género a las siguientes leyes: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General de Partidos Políticos; Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La reforma a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incorpora el concepto de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, considera acciones u omisiones que expresan Violencia Política contra las Mujeres, garantiza protección desde las precandidaturas y candidaturas a contender en condiciones de igualdad con los hombres como lo son apoyo para campañas electorales; acceso a tiempos de radio y tv de los partidos y monitoreo de spots, y también garantiza sus derechos en la posesión del cargo y el ejercicio del mismo; faculta al INE, a Organismos Públicos Locales Electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los Tribunales Electorales Locales para solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de medidas de protección, tanto precautorias como cautelares; se integra al INE al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; así mismo se le faculta así como a los Organismos Públicos Locales Electorales para promover la cultura de la no violencia; incorpora la perspectiva de género al monitoreo de transmisiones sobre precampañas y campañas electorales en programas de radio y televisión y sanciona las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género.

Mientras que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Establece el concepto de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género se establece: el requisito de elegibilidad para que una persona sea registrada para ser diputada o senadora, no estar condenada por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género; faculta al Consejo General del INE y a la Comisión de Quejas y Denuncias a suspender inmediatamente la propaganda política o electoral en radio y TV en cuyos contenidos identifique Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género y cuando se acredite la violencia en uso de la prerrogativa de radio y TV que se otorga a los partidos el Consejo General del INE ordenará se utilice el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y TV del partido político de la persona infractora para ofrecer disculpa pública con la finalidad de reparar el daño; además, faculta al Consejo General del INE y a la Comisión de Quejas y Denuncias para suspender cualquier propaganda que incurra en Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

---Establece un Procedimiento Especial Sancionador para denunciar, investigar y resolver casos de violencia política contra las mujeres en razón de género a petición de parte o de oficio, debiendo hacer lo mismo las leyes electorales locales sustanciando en lo conducente y establece un catálogo de conductas que constituyen infracciones por este tipo de violencia.

---En este procedimiento se podrán determinar Medidas Cautelares, realizar Análisis de Riesgos y un Plan de Seguridad; retirar la campaña violenta contra la víctima haciendo públicas las razones y la suspensión inmediata de spots de partidos políticos en radio y TV, mensajes en redes sociales y cualquier otro tipo de propaganda y cualquier otra medida requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite; así mismo se puede solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de Medidas de Protección tanto precautorias y cautelares. Contempla la determinación de Medidas de Reparación tales como indemnización de la víctima, restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública en los tiempos de radio y Tv que corresponden al partido del sujeto infractor así como Medidas de No Repetición.

---4.- Que el día 2 de junio de 2020 el Congreso del Estado de Sinaloa en atención al marco legislativo de carácter general, llevó a cabo las reformas en materia de Violencia Política Contra la Mujer en Razón de Género modificando las siguientes disposiciones legales: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas; en estas reformas se define la violencia política contra las mujeres en razón de género, se establecen obligaciones al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa tales como promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres; incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las precampañas y campañas electorales; sustanciar los procedimientos sancionadores de acuerdo con la normatividad aplicable respecto de las conductas que constituyan violencia de este tipo; desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en

la entidad que incluyan la paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral; orientar a la ciudadanía en la entidad para el ejercicio y protección de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto; vigilar se prevenga, atienda y erradique la violencia política contra las mujeres en razón de género sin discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; se contempla también en la reforma el dictado de Medidas Cautelares y de Reparación; establece que en cualquier tiempo, dentro y fuera de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto instruirá el Procedimiento Especial Sancionador por conductas que constituyan casos de violencia de este tipo en los términos previstos en la ley. En la reforma a la Ley de Medios de Impugnación determina que procederá el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano en caso de configurarse alguna de las conductas descritas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa; así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Por otro lado en la Ley de Responsabilidades Administrativas se señala que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.

---5.- Que el día 04 de octubre de 2020 se llevó acabo reunión de trabajo virtual de la Comisión de Quejas y Denuncias, convocada por su titular, la Consejera Electoral Mtra. Gloria Icela García Cuadras, contándose en dicha reunión de trabajo de la Comisión de Quejas y Denuncias, con la colaboración de las Consejerías integrantes de la misma, la Mtra. Perla Lyzette Bueno Torres y el Lic. Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, así como con el Secretario Ejecutivo Lic. Arturo Fajardo Mejía, para revisar y en su caso aprobar el Proyecto para emitir nuevo Reglamento de Quejas y Denuncias del IEES atendiendo a las reformas que se han mencionado en los considerandos 3 y 4 del presente Acuerdo así como otros elementos, a efecto de dotar de acciones claras observando el principio de legalidad y certeza en dicho Reglamento, el cual fue aprobado por unanimidad, procediendo a instruir a la Secretaria Ejecutiva del IEES a efecto de que lo haga de conocimiento de la totalidad de las Consejerías de éste Instituto Electoral para su estudio y en su caso modificación y/o aprobación así como al resto de los integrantes del Consejo General para que en su oportunidad se someta a votación.

--- En virtud de los antecedentes y considerandos expuestos y preceptos legales invocados con antelación, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:

ACUERDO

---**PRIMERO.**- Se abroga el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, aprobado por acuerdo IEES/CG017/15, aprobado en sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2015.

---**SEGUNDO.**- Se aprueba el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

---**TERCERO.**- En tanto se realice la creación del área de la Oficialía Electoral y la designación de la persona titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso regulada en el Reglamento interior de este Instituto, la Secretaría Ejecutiva atenderá las actividades que el presente Reglamento le atribuyen a éstas.

---**CUARTO.**- Con el fin de no interferir en la identificación adecuada de los expedientes que se tramitan actualmente, se determina que el artículo 14 del reglamento aprobado entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2021.

---**QUINTO.**- Publíquese este Reglamento el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, en el Sitio web del Instituto.

---**SEXTO.**- Notifíquese a los Partidos Políticos con registro ante este órgano electoral.


MTRA. KARLA GABRIELA PERAZA ZAZUETA
CONSEJERA PRESIDENTA


LIC. ARTURO FAJARDO MEJÍA
SECRETARIO EJECUTIVO

La presente resolución fue aprobada por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada a los veintinueve días del mes de octubre de 2020.

REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA

TÍTULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I Del ámbito de aplicación y de los criterios de interpretación

Artículo 1. Disposiciones Generales.

1. El Reglamento es de orden público y de observancia general en el Estado de Sinaloa.
2. Tiene por objeto regular los procedimientos sancionadores establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa competencia de este Instituto, así como el procedimiento para la adopción de medidas cautelares y de protección.
3. Las normas contenidas en el Reglamento son aplicables a los procedimientos sancionadores que se tramitan y sustancian tanto por el órgano central como por los Consejos Distritales y Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Artículo 2. Los criterios de interpretación son los siguientes:

1. La interpretación de las normas de este Reglamento se realizará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1º y 14 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a falta de disposición expresa se fundará en los principios generales del derecho.
2. Todas las disposiciones que emanen del presente Reglamento serán interpretadas de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.
3. Se aplicarán los principios del derecho administrativo sancionador electoral, los desarrollados por el derecho penal y en lo que sea aplicable los principios generales del derecho.

Artículo 3. Para los efectos de lo previsto en este Reglamento, se entenderá por:

- I. Actos Anticipados de Campaña: Son acciones y expresiones realizadas bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que llamen expresamente



al voto a favor o en contra de una candidatura o partido político, o que soliciten cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

II. Actos Anticipados de Precampaña: Son acciones y expresiones realizadas bajo cualquier modalidad y en cualquier momento entre el inicio de un proceso electoral y el inicio de los procesos internos de los partidos para seleccionar a sus candidaturas a cargos de elección popular, con el objeto expreso de pedir el voto a favor o en contra de una precandidatura;

III. Afiliados, afiliadas o militantes: Aquella persona que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación.

IV. Aspirantes a candidatura: Ciudadana o ciudadano que tiene el interés de participar a través de un partido político o de manera independiente como candidata o candidato.

V. Candidata o Candidato: Es la ciudadana o ciudadano que obtuvo su registro ante el Instituto para contender por un cargo de elección popular, sea independiente o postulado por un partido político o coalición.

VI. Comisión: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

VII. Consejería Titular: La consejera o el consejero titular de la Comisión de Quejas y Denuncias.

VIII. Consejerías Electorales: Las consejeras y Consejeros Electorales designados por el Instituto Nacional Electoral conforme al procedimiento previsto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

IX. Consejos: Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

X. Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

XI. Denunciada o denunciado: Persona contra quien se formula la queja o denuncia.

XII. Instituto: El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

XIII. Parte quejosa o denunciante: Quien suscribe la queja o denuncia.

XIV. Ley Electoral: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

XV. Ley de Medios de Impugnación: Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa.

XVI. Medidas cautelares: Actos procedimentales que determine la Comisión, los Consejos, a solicitud de parte o bien de la Secretaría Ejecutiva, a fin de lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la resolución definitiva.

XVII. Medidas de Protección: Actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias. Deben otorgarse inmediatamente por la autoridad competente, que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia política contra las mujeres en razón de género.

XVIII. Oficialía Electoral: Órgano especializado del Instituto, el cual estará integrado por las y los servidores públicos investidos con facultades suficientes para dar fe pública respecto de actos o hechos de naturaleza electoral.

XIX. Partidos políticos: Partidos políticos nacionales y locales.

XX. Perspectiva de género: Visión analítica, metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

XXI. Plan de Seguridad. Documento que elaborará la autoridad competente, a partir del análisis de riesgo que se haga a la víctima, donde se identifica, previene y mitigan riesgos futuros a través de una estrategia para su seguridad.

XXII. Precandidata o Precandidato: La o el ciudadano que participa en un proceso de selección interna de un partido político para ser postulado como candidata o candidato a un cargo de elección popular.

XXIII. Presidencia de Consejo: Las y los presidentes de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto.

XXIV. Proyecto: Proyecto de Resolución.

XXV. Queja o denuncia: Acto por medio del cual se hace del conocimiento del Instituto, hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral.

XXVI. Reglamento: Reglamento de Quejas y Denuncias.

XXVII. Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto.

XXVIII. Secretaría: Las y los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto.

XXIX. Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

XXX. Unidad Técnica: Unidad Técnica de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva.

XXXI. Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

CAPÍTULO II

De los procedimientos sancionadores y las medidas cautelares

Artículo 4. De los Procedimientos Sancionadores.

1. Los procedimientos que se regulan en el Reglamento son:

- I. El procedimiento sancionador ordinario, respecto al trámite, sustanciación y resolución.
- II. El procedimiento sancionador especial, únicamente en cuanto a su trámite y sustanciación.
- III. El procedimiento para la adopción de medidas cautelares, en asuntos de competencia exclusiva del Instituto.

2. La Secretaría Ejecutiva determinará desde el dictado del primer acuerdo y, en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse las quejas y denuncias que se interpongan, atendiendo a los hechos denunciados y a la presunta infracción.

3. La Secretaría Ejecutiva se auxiliará, en su caso, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para el trámite y sustanciación de los procedimientos sancionadores.

CAPÍTULO III

Finalidad de los procedimientos

Artículo 5. La finalidad de los procedimientos sancionadores así como los del dictado de medidas cautelares son las siguientes:

1. Los procedimientos sancionadores tienen como finalidad tramitar y sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, o aquéllas iniciadas de oficio, a efecto de que la autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las partes y las que, en su caso, se hayan obtenido durante la investigación, determine:

I. En el caso de los procedimientos sancionadores ordinarios:

- a) La existencia o no, de faltas a la normatividad electoral local y, en su caso, imponga las sanciones que correspondan, o bien, remita el expediente a la instancia competente, y;

b) Restituir el orden vulnerado e inhibir las conductas violatorias de las normas y principios que rigen la materia electoral.

II. En el caso de los procedimientos sancionadores especiales, tramitar y sustanciar el procedimiento y turnar el expediente al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para su resolución.

2. Los procedimientos para la atención de las solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

CAPÍTULO III **De la competencia**

Artículo 6. Órganos competentes.

1. Son órganos competentes para la tramitación, sustanciación y/o resolución de los procedimientos sancionadores:

- I. El Consejo General.
- II. La Comisión de Quejas y Denuncias.
- III. La Secretaría Ejecutiva.
- IV. La Unidad Técnica de lo Contencioso.
- V. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.
- VI. Los Consejos Distritales y Municipales.

2. Los órganos del Instituto conocerán:

I. A nivel Central:

a) Del procedimiento sancionador ordinario, el cual es tramitado, sustanciado y resuelto, cuando se denuncie la infracción de normas electorales que no sean materia del procedimiento sancionador especial.

b) Del procedimiento sancionador especial, tramitado y sustanciado por la Secretaría Ejecutiva, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

1. Violen el cumplimiento del principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, cuando tal conducta pudiere afectar la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las y los aspirantes a candidatura, las y los precandidatos, o las y los candidatos durante los procesos electorales;

2. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos y candidaturas independientes, en la Ley Electoral;
3. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña;
4. Constituyan casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

c) Del procedimiento para la adopción de medidas cautelares.

Las quejas que tengan como finalidad denunciar conductas violatorias a la normatividad electoral y que se relacionen con la elección de gobernador del estado, la autoridad competente para tramitarla y, en su caso, resolverla, será el órgano central del instituto.

En los procedimientos sancionadores que se tramiten por el órgano central, el quejoso o denunciante deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Medios de Impugnación, aplicado de manera supletoria. Su omisión conllevará que las notificaciones se practiquen por estrados.

II. A nivel distrital o municipal, cuando durante el proceso electoral se denuncie:

- a) La ubicación física o el contenido de propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas, o de cualquiera diferente a la transmitida por radio o televisión;
- b) Actos anticipados de precampaña o campaña, siempre y cuando el medio comisivo de la infracción sea diferente a radio o televisión.
- c) Del procedimiento para la adopción de medidas cautelares.

Cuando en la queja por propaganda a que se refieren las fracciones de este apartado se denuncien actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Consejo que reciba la queja, la remitirá sin más trámite a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que proceda a sustanciarla conforme la Ley Electoral.

Artículo 7. Del personal de apoyo en los Consejos Distritales y Municipales.

1. Para los efectos previstos en la Ley Electoral y este Reglamento, los Consejos contarán con personal de apoyo, dicho personal recibirá capacitación respecto al trámite y sustanciación de las quejas y denuncias por parte de la Secretaría Ejecutiva.

2. Los Consejos, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos auxiliares para la sustanciación de los procedimientos que se conozcan a nivel central.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 8. Reglas aplicables a los procedimientos sancionadores ordinario y Especial

1. Las disposiciones de este Título rigen para el trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos.

CAPÍTULO II
Del cómputo de los plazos

Artículo 9. Cómputo de los plazos.

1. En el cómputo de los plazos se estará a lo siguiente:

I. Si la emisión de un acto procesal entraña su cumplimiento de un plazo en días, las notificaciones de los mismos comenzarán a surtir efectos a partir del día siguiente en que fueron realizadas.

II. Si la emisión de un acto procesal durante la tramitación de los procedimientos objeto de este Reglamento entraña su cumplimiento de un plazo en horas, las notificaciones de los mismos comenzarán a surtir efectos al momento de su notificación.

III. Durante los Procesos Electorales, todos los días y horas son hábiles.

IV. En el caso de las quejas o denuncias que se reciban antes del inicio del Proceso Electoral, los plazos se computarán en días hábiles, en tanto que las que se presenten una vez iniciado aquél, en días naturales.

2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por días hábiles, los laborables, que corresponden a todos los días a excepción de sábados, domingos, no laborables en términos de Ley y aquéllos en que el Instituto suspenda actividades, de conformidad con el acuerdo publicado a inicio de año en los estrados del Instituto.

3. Durante el tiempo que no corresponda a un Proceso Electoral, serán horas hábiles las que determine el Instituto.

4. Fuera de Proceso Electoral, y para efecto de la tramitación y sustanciación del procedimiento sancionador especial por actos de violencia política contra la mujer en razón de género, así como aquellas que se deriven del dictado de medidas cautelares y de protección, la Secretaría Ejecutiva podrá habilitar cualquier día y hora cuando el caso y las circunstancias así lo ameriten.

CAPÍTULO III **De la legitimación.**

Artículo 10. Legitimación.

1. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la presunta comisión de conductas infractoras.
2. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral, ante el órgano central o ante los consejos.
3. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que calumnie, sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.
4. Los partidos políticos, aspirantes a una candidatura, precandidata o precandidato, las candidatas o candidatos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito, a través de sus representantes debidamente acreditados, o en su caso, por su propio derecho. Las personas morales lo harán por medio de sus representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas por su propio derecho, debiendo ser ratificadas ante la Secretaría Ejecutiva.

CAPÍTULO IV **De la acumulación y escisión**

Artículo 11. De la acumulación y escisión.

1. A fin de resolver en forma expedita las quejas y denuncias que conozca la autoridad electoral, y con el objeto de determinar en una sola resolución respecto de dos o más de ellas, de oficio o a petición de parte, la Secretaría Ejecutiva, decretará la acumulación de expedientes desde el momento de acordar la admisión y hasta antes de cerrar instrucción, siempre y cuando exista litispendencia o conexidad en la causa.

I. La Secretaría Ejecutiva atenderá a lo siguiente:

- a) Litispendencia, entendida como la relación existente entre un procedimiento que aún no resuelve la autoridad competente y otro que recién ha sido iniciado en los que existe identidad de sujetos, objeto y pretensión.
- b) Conexidad, entendida como la relación entre dos o más procedimientos que provienen de una misma causa e iguales hechos, aunque los sujetos sean distintos, de tal suerte que sean resueltos en el mismo acto a fin de evitar resoluciones contradictorias.

2. La escisión se entiende como la figura procesal que tiene lugar cuando varios procedimientos han sido acumulados y es necesaria su separación para que sean tramitados independientemente unos de otros, o cuando en un mismo proceso es necesario formar otro distinto para decidir en él algunas de las cuestiones litigiosas que se ventilan en el mismo, siempre y cuando no obstaculice la determinación de responsabilidad respecto del asunto principal.

3. La Secretaría Ejecutiva, podrá escindir un procedimiento cuando se siga contra varias personas y existan elementos razonables y proporcionales que impidan continuar con la sustanciación paralela respecto de todas y todos los presuntos responsables. En ese caso se resolverá el asunto respecto de aquellas y aquellos sujetos sobre los que ya se encuentre sustanciado el procedimiento y concluida la investigación. Las resoluciones que al efecto se dicten, deberán glosarse al mismo expediente.

4. En los procedimientos sancionadores ordinarios se podrá realizar la escisión del procedimiento hasta antes del cierre de instrucción y en el caso de los procedimientos sancionadores especiales, hasta el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, con base en un acuerdo en el que se deberán exponer los razonamientos fundados y motivados de la escisión.

CAPÍTULO V

De la recepción de la queja o denuncia, registro e integración de expedientes

Artículo 12. Recepción y remisión del escrito inicial a la Secretaría Ejecutiva.

1. La queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano del Instituto, quien la remitirá a la Secretaría Ejecutiva, cuando sea competencia a nivel central, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes para su trámite en el procedimiento sancionador ordinario y, en forma inmediata en el procedimiento sancionador especial. En caso de ratificación, el plazo correrá a partir de que se produzca o transcurra el término concedido al efecto.

2. Los Consejos que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia, procederán a enviar el escrito a la Secretaría Ejecutiva, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, realizando las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que estimen pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma.

3. La presidencia del Consejo que reciba la queja o denuncia, y esta sea de su competencia la revisará de inmediato para determinar las acciones encaminadas a salvaguardar y recopilar las pruebas de los hechos denunciados, como son:

- I. Apersonarse de manera inmediata en los lugares señalados por la parte quejosa a efecto de constatar los hechos denunciados;

II. Elaborar acta circunstanciada en el lugar o lugares señalados por la parte que denuncia;

III. Registrar, por medios mecánicos, digitales o electrónicos, las imágenes de fotografía, audio o video relacionadas con los hechos denunciados, lo que deberá detallarse sucintamente en el acta señalada en la fracción anterior;

IV. En su caso, indagar con las o los vecinos, locatarios, lugareños o autoridades de la zona, si los hechos denunciados ocurrieron y/o si la propaganda denunciada se encontró en los lugares aludidos en el escrito de queja o denuncia, y en caso de ser positiva la respuesta, recabar información consistente en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aquéllos se desarrollaron o la propaganda estuvo fijada, pegada o colgada, y el tiempo durante el cual se encontró en dicho lugar, debiendo relacionarse dicha información en el acta señalada en la fracción II de este párrafo.

4. Tratándose de los procedimientos sancionadores especiales, el órgano del Instituto que reciba la queja o denuncia o inicie de oficio el procedimiento, con excepción de la correspondiente a propaganda en vía pública, remitirá inmediatamente la documentación correspondiente a la Secretaría Ejecutiva para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas, y determine lo conducente.

Artículo 13. Del inicio oficioso y de la participación de otras u otros sujetos.

1. Dictado el acuerdo de admisión, y si derivado de la sustanciación de la investigación preliminar, la Secretaría Ejecutiva advierte la participación de otras u otros sujetos en los hechos denunciados, deberá emplazarlos y sustanciar el procedimiento respecto de todas y todos los probables sujetos infractores, pudiendo aplicar a juicio de la Secretaría Ejecutiva, lo establecido en el artículo 11 de este Reglamento.

2. Si la Secretaría Ejecutiva advierte hechos distintos al objeto de ese procedimiento, que puedan constituir distintas violaciones o la responsabilidad de actores diversos a las o los denunciados, iniciará de oficio un nuevo procedimiento de investigación, o de ser el caso, ordenará dar vista a la autoridad competente.

3. En caso de que alguna autoridad remita constancias a este Instituto para efectos de analizar si existen elementos que constituyan infracciones en materia electoral, la Secretaría Ejecutiva integrará un Cuaderno de Antecedentes, analizará las constancias y en caso de que no existan elementos propondrá a la Comisión un acuerdo de improcedencia.

En caso contrario, es decir que existan elementos para instaurar el procedimiento sancionador, integrará expediente de queja y lo tramitará conforme a la Ley Electoral y a este reglamento.

Artículo 14. Registro y seguimiento de los expedientes.

1. Recibida la queja, denuncia o iniciado el procedimiento de oficio, la Secretaría Ejecutiva o la Presidencia del Consejo correspondiente asignará el número de expediente de manera consecutiva, identificando el procedimiento del que se trate.

I. El número de expediente se asignará con base en la nomenclatura siguiente:

a) Órgano receptor:

Secretaría Ejecutiva --- SE,

Consejo Distrital --- CD y el número que corresponda;

Consejo Municipal -- CM y el municipio que corresponda.

b) Queja Administrativa: QA (Queja Administrativa).

c) Tipo de procedimiento:

Procedimiento Sancionador Ordinario --- PSO

Procedimiento Sancionador Especial – PSE.

d) El número consecutivo compuesto de tres dígitos. Ej. 001, 002, etc.

e) Año de presentación de la queja en cuatro dígitos.

II. En caso de expedientes que se formen con motivo de solicitudes o actuaciones carentes de una vía específica regulada legalmente, el número se asignará de la forma anteriormente señalada, pero en lugar de la letra Q (queja) se escribirán las letras CA (Cuaderno de Antecedentes)

III. En caso de los expedientes que se formen con motivo de procedimiento de Revisión de Sanciones a Presidencias y Consejerías de los Consejos Distritales o Municipales, el número se asignará de la forma señalada en la fracción I del presente artículo, pero en lugar de la letra Q (Queja) se escribirán las letras RS (Revisión de Sanción) y cuando se trate de revisión de desechamientos (RD).

IV. Registrar el expediente en el Libro de Gobierno, anotando los datos siguientes: número que le fue asignado, nombre del quejoso, denunciado, acto impugnado, fecha de presentación. En su oportunidad fecha de resolución y sentido de la misma.

CAPÍTULO VI

De la investigación

Artículo 15. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, así como con estricto apego a los principios de legalidad, profesionalismo, concentración de actuaciones, mínima intervención y proporcionalidad.

1. Si con motivo de la investigación la Secretaría Ejecutiva advierte la comisión de otra infracción, iniciará el procedimiento correspondiente, u ordenará dar vista a la autoridad competente.
2. Las diligencias practicadas por la Oficialía Electoral para dar fe de actos y hechos de naturaleza electoral, no serán obstáculo para que se lleven a cabo las propias en los procedimientos sancionadores.
3. En los acuerdos de radicación o admisión de la queja o denuncia, se determinará la inmediata certificación de documentos u otros medios de prueba que se requieran, así se deberán determinar las diligencias necesarias de investigación, sin perjuicio de dictar diligencias posteriores con base en los resultados obtenidos de las primeras investigaciones.

Artículo 16. Medidas para evitar que se dificulte el esclarecimiento de los hechos.

1. La Secretaría Ejecutiva, a través de la Oficialía Electoral, en el desarrollo de la función de dar fe pública de actos y hechos de naturaleza electoral, tomará las medidas necesarias para evitar que se alteren, destruyan o extravíen las huellas o vestigios que acrediten la existencia de los hechos denunciados.
2. La investigación de los procedimientos se llevará a cabo conforme al protocolo que para tal efecto establezca la Comisión.

Artículo 17. Apoyo de los Consejos al órgano central, en la integración del expediente.

1. La Secretaría Ejecutiva se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará a los Consejos del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias.

Artículo 18. Apoyo de autoridades, ciudadanas o ciudadanos, afiliadas o afiliados o las y los dirigentes de un partido político.

1. La Secretaría Ejecutiva podrá solicitar a cualquier autoridad, los informes, certificaciones o apoyos necesarios para la realización de diligencias que coadyuven en la investigación.
2. Los partidos políticos, precandidatas o precandidatos, aspirantes a candidaturas, candidatas o candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas, ciudadanas o ciudadanos, afiliadas o afiliados, las y los militantes o dirigentes, así como las personas físicas y morales también están obligadas a remitir la información que les sea requerida por la Secretaría Ejecutiva.
3. Los requerimientos podrán decretarse hasta en dos ocasiones, apercibiéndose desde el primero de ellos que, en caso de incumplimiento, se harán acreedores a una medida de apremio, sin perjuicio de que pueda iniciarse un procedimiento oficioso.

Artículo 19. Autoridades encargadas de la realización de diligencias.

1. En el ámbito de sus atribuciones, las diligencias podrán realizarse por:

I. Las o los funcionarios competentes de la Secretaría Ejecutiva; y

II. La Presidencia de los Consejos, podrán instruir al personal de apoyo para que las lleven a cabo. En este caso, la responsabilidad de la investigación recaerá siempre en dicha autoridad.

CAPÍTULO VII De las Pruebas

Artículo 20. De los medios de prueba.

1. Serán considerados como medios probatorios, los siguientes:

I. Documentales públicas, siendo éstas las siguientes:

a) Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos y las funcionarias o funcionarios electorales en el ejercicio de sus funciones, dentro del ámbito de su competencia;

b) Los documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades, y

c) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública en términos de ley.

II. Documentales privadas, entendiéndose por estas todos los demás documentos que no reúnan los requisitos señalados en la fracción anterior;

III. Técnicas, consideradas como las fotografías, los medios de reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de los consejos competentes o no sean proporcionados por quien las ofrece.

En todo caso, la parte quejosa o denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba;

IV. Pericial, considerada como el dictamen que contenga el juicio, valoración u opinión de personas que cuenten con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica o arte;

V. El reconocimiento o inspección judicial, entendido como el examen directo por quienes ejerzan la función de dar fe pública de actos de naturaleza electoral para la verificación de

los hechos denunciados, con el propósito de hacer constar su existencia, así como de las personas, cosas o lugares que deban ser examinados;

VI. Presuncionales, las cuales se entenderán como los razonamientos de carácter deductivo o inductivo por los cuales de un hecho conocido se determina la existencia de otro desconocido y pueden ser:

- a) Legales: las que se establecen expresamente en un ordenamiento jurídico, o
- b) Humanas: las que realiza el operador jurídico a partir de las reglas de la lógica.

VII. La instrumental de actuaciones, consistente en el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente;

VIII. La confesional; y

IX. La testimonial.

Artículo 21. Del ofrecimiento, la admisión y desahogo de las pruebas.

1. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se pretenden acreditar, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas.

2. Tratándose del procedimiento sancionador especial, sólo serán admitidas las pruebas documentales y técnicas.

3. La confesional y la testimonial, únicamente serán admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de las y los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

4. La técnica, será desahogada siempre y cuando la parte que la ofrece aporte los medios para tal efecto o la autoridad cuente con ellos.

5. La autoridad que sustancie el procedimiento ordinario o especial podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como pruebas periciales cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, tomando en consideración los principios de expedites y debido proceso.

El desahogo de los reconocimientos o inspecciones judiciales atenderá a lo siguiente:

- I. Las o los representantes partidistas, aspirantes a una candidatura, precandidata o precandidato, candidata o candidato, o en su caso, sus representantes debidamente acreditados, pueden concurrir al reconocimiento o inspección judicial, siempre que exista petición clara y motivada de lo que con ella se pretende acreditar. Para tal efecto, la

autoridad que sustancie el procedimiento, les comunicará mediante oficio la realización de dicha inspección de manera inmediata;

II. Del reconocimiento o inspección judicial se elaborará acta en que se asiente los hechos que generaron la denuncia presentada, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y observaciones que realicen los que en ella acudieron, debiendo identificarse y firmar el acta. Cuando fuere preciso se harán planos o se tomarán vistas fotográficas del lugar u objeto inspeccionado; y

III. En el acta de la diligencia instrumentada por el personal del Instituto, deberán asentarse de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción de que se constataron los hechos que se instruyó verificar; además de asentar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la actuación, se detallarán:

- a) Los medios por los que se cercioró que efectivamente se constituyó en los lugares indicados;
- b) Las características o rasgos distintivos de los lugares en donde se actuó;
- c) Los elementos que se observaron en relación con los hechos objeto de la inspección;
- d) Los medios en que se registró la información; y
- e) Los nombres de las personas con las que, en su caso se entrevistó y la información que éstas proporcionaron respecto de los hechos materia de inspección o reconocimiento.

6. Para el desahogo de la prueba pericial, se deberán seguir las reglas siguientes:

- I. Designar a la o el perito, que deberá acreditar fehacientemente su conocimiento técnico o especializado;
- II. Formular el cuestionario al que será sometida la o el perito, integrado por las preguntas específicas y concretas que considere pertinente;
- III. Dar vista con el referido cuestionario a las partes, para que por una sola ocasión, adicionen las preguntas que consideren necesarias;
- IV. Tras lo anterior, previa calificación de la autoridad que desahogue el procedimiento, integrará las preguntas formuladas por las partes al cuestionario que será sometido a la o el perito;
- V. Someterá el cuestionario al desahogo de la o el perito designado; y
- VI. Una vez respondido el cuestionario, dar vista del mismo a la parte quejosa o denunciada, para que expresen lo que a su derecho convenga.

7. Además de los requisitos señalados en el párrafo 1 del presente artículo, cuando se acuerde el desahogo de la prueba pericial, deberán cumplirse los requisitos siguientes:

I. Señalar el nombre completo, domicilio y teléfono de la o el perito que se proponga y acreditar que cuenta con título profesional que acredite su capacidad técnica para desahogar la pericial; y

II. Acordar la aceptación del cargo de la o el perito y llevar a cabo la protesta de su legal desempeño.

Artículo 22. De la objeción.

1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial.

En el procedimiento ordinario siempre y cuando se realice antes del cierre de instrucción mientras que en el procedimiento especial se podrá realizar en la audiencia de desahogo o en su caso, en la contestación.

2. Para efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio, debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o el por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.

Artículo 23. De las pruebas supervenientes.

1. Las partes podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.

2. Se entiende por pruebas supervenientes los medios de convicción ofrecidos después del plazo legal en que deban aportarse, pero que la parte oferente no pudo aportar por desconocerlos, por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar o porque se generaron después del plazo legal en que debían aportarse.

3. Admitida una prueba superveniente, se dará vista a las partes, según corresponda, en los procedimientos sancionadores. En el procedimiento sancionador ordinario se otorgará el plazo de cinco días y en el procedimiento sancionador especial un plazo de 24 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga.

En ningún caso será admitida una prueba superveniente correspondiente de un proceso sancionador especial vencido el plazo para turnar el expediente al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para su resolución.

Artículo 24. Hechos objeto de prueba.

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Tanto la Secretaría Ejecutiva, la Comisión y el Consejo General podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por las partes. En todo caso, una vez que se haya apersonado la denunciada o denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo que se oculte o destruya el material probatorio.

2. Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por Ley Electoral son renunciables.

Artículo 25. Valoración.

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y a las máximas de la experiencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, instrumental de actuaciones, el reconocimiento, las inspecciones judiciales y aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena para resolver cuando generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias que obren en el expediente, estas tendrán valor indiciario.

5. Los indicios se valorarán de forma adminiculada. Si están dirigidas en un mismo sentido, sin ninguna prueba o indicio en contrario, así se señalará de forma expresa en la resolución correspondiente.

6. En ningún caso se valorará el dolo o mala fe en su beneficio.

CAPÍTULO VIII De las Notificaciones

Artículo 26. Reglas generales.

1. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se dicten las resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos el día siguiente en que fueron realizadas.
2. Serán nulas las notificaciones que se practiquen en términos diversos a los previstos en la Ley Electoral y este Reglamento, salvo que la persona interesada se manifieste sabedor del acto o resolución respectiva, para lo cual se tendrá notificado a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la misma.
3. Las notificaciones podrán hacerse de forma personal, por cédula, por oficio y por estrados.
4. Las notificaciones se harán en días y horas hábiles. Durante el Proceso Electoral todos los días y horas son hábiles.
5. De toda notificación se levantará la razón correspondiente, la cual se glosará al expediente respectivo.
6. Independientemente que las notificaciones se hagan por escrito, en casos urgentes, las mismas podrán ser comunicadas vía correo electrónico; la notificación será válida siempre y cuando se cuente con el acuse de recibido firmado en forma autógrafa.
7. Los acuerdos que entrañen la adopción de medidas cautelares se notificarán por la vía más expedita.
8. La Secretaría Ejecutiva podrá ordenar su remisión por correo electrónico a los órganos desconcentrados para que, mediante oficio signado por la presidencia del Consejo correspondiente, se practique la notificación en los términos ordenados en el acuerdo respectivo.
9. Para los efectos de la investigación y del Reglamento respectivo, el personal del Instituto al que la Secretaría Ejecutiva haya delegado facultades de fe pública para actos de naturaleza electoral, podrán practicar las notificaciones que les sean instruidas.

Artículo 27. Notificaciones personales.

1. Las notificaciones serán personales:
 - a) El primer acuerdo o resolución a algunas de las partes;
 - b) El emplazamiento al procedimiento y la resolución del mismo; y
 - c) Las demás que se determinen en la normatividad aplicable.
2. La práctica de estas notificaciones se sujetará al siguiente procedimiento:

I. La diligencia se entenderá directamente con la parte interesada, o con quien designe. Se practicará en el domicilio de las partes o en el señalado por éstas para oír y recibir notificaciones;

II. Quien notifica deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona notificada sea la señalada para oír y recibir notificaciones y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia autorizada del acto o resolución correspondiente a la persona interesada o a quien haya autorizado. En autos se asentará razón de todo lo anterior;

III. Si la parte interesada o autorizada no se encuentra en el domicilio, se dejará citatorio con cualquiera de las personas que allí se encuentren, el cual contendrá:

- a) Denominación del órgano que dictó la resolución que se pretende notificar;
- b) Datos del expediente;
- c) Extracto de la resolución que se notifica;
- d) Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega, y;
- e) El señalamiento del día y la hora en la que deberá esperar la notificación.

IV. Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, quien notifica se constituirá nuevamente en el domicilio y si la parte interesada no se encuentra, se hará la notificación por estrados, de todo lo cual se asentará la razón correspondiente.

V. Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, en la puerta de entrada del domicilio se fijará original de la cédula y copia del documento a notificar, procediendo a realizar la notificación por estrados.

En autos se asentará razón de todo lo anterior, y

VI. Cuando las o los promoventes o comparecientes señalen un domicilio que no resulte cierto o no exista, la notificación se practicará por estrados. En autos se asentará razón de todo lo anterior.

3. Las cédulas de notificación personal deberán contener:

I. La descripción del acto o resolución que se notifica;

II. Lugar, hora y fecha en que se practica;

III. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, indicando su relación con la parte interesada o, en su caso, que se negó a proporcionarla;

IV. En su caso, la razón que en derecho corresponda, y

V. Nombre y firma de quien notifica, así como la firma de quien recibe la notificación.

4. En todos los casos, al realizar una notificación personal, se integrará al expediente la cédula respectiva y el acuse de la notificación, asentando la razón de la diligencia.

5. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia de la parte interesada, de su representante, o de su autorizado ante el órgano que corresponda. En tales casos, se deberá asentar en autos la razón de la comparecencia y deberá agregarse una copia simple de la identificación oficial con la cual se haya identificado la o el compareciente, o bien tratándose de las o los representantes o apoderados legales, previa copia del instrumento legal con el que acredita dicha personalidad.

6. Cuando el acuerdo o resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia, la notificación se hará personalmente, al menos con tres días hábiles de anticipación al día y hora en que se deba celebrar la actuación o audiencia, salvo disposición legal expresa en contrario.

7. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de investigación será personal, se hará a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se dicten o, en su caso, que se formule el engrose correspondiente, entregando a las partes copia autorizada de la resolución.

Artículo 28. Notificaciones por estrados.

1. Las notificaciones por cédula se fijarán en los estrados del Instituto o del órgano que emita la resolución o acuerdo. Las cédulas deberán contener los datos de la persona a quien se notifica y el acto o resolución a notificar por no haberse podido practicar la notificación de forma personal, como lo dispone la Ley Electoral.

Artículo 29. Notificaciones por oficio.

1. Las notificaciones que se dirijan a una autoridad u órgano partidario, se practicarán por oficio.

Artículo 30. Notificación automática.

1. Si las partes son integrantes del Consejo, se entenderá hecha la notificación al momento de su aprobación por dicho órgano, siempre y cuando la o el representante o integrante se encuentra en la sesión.

Artículo 31. Notificaciones electrónicas.

1. En caso de que las partes en el procedimiento de investigación materia de este Reglamento, mediante escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva, manifiesten su voluntad para que las notificaciones les sean realizadas electrónicamente.

2. Para lo anterior, la Secretaría Ejecutiva o el personal que ella designe, realizará la notificación al correo respectivo incluyendo la opción de "solicitar una confirmación de lectura", a fin de constatar que la o el destinatario recibió la notificación.

3. De igual forma, levantará constancia en la que se asiente la identificación del escrito, acuerdo o dictamen materia de la notificación; hora, fecha y dirección del correo electrónico remitente, y de igual forma, anexará a dicha constancia una impresión del documento mediante el cual se realizó la notificación.

En caso de que por alguna falla técnica o cualquier otra circunstancia sea materialmente imposible confirmar que la o el destinatario recibió la notificación electrónica, la Secretaría confirmará por cualquier otro medio que efectivamente se recibió dicha notificación, levantándose la constancia correspondiente.

En caso de que sea materialmente imposible constatar por cualquier vía que la o el destinatario recibió la notificación, esta se realizará al día siguiente por estrados en los términos del presente reglamento.

CAPÍTULO IX

De los Medios de Apremio

Artículo 32. Medios de apremio.

1. Por medios de apremio se entiende el conjunto de medidas a través de los cuales los órganos del Instituto que sustancien el procedimiento, pueden emplear para hacer cumplir coercitivamente sus determinaciones, señalándose los siguientes:

I. Amonestación;

II. Multa que va desde los cincuenta hasta los cinco mil Unidad de Medida y Actualización;

III. Auxilio de la fuerza pública; y

IV. Arresto hasta por 36 horas, con el apoyo de la autoridad competente.

2. Las multas que se impongan a los sujetos del régimen sancionador electoral, que no hubiesen sido impugnadas, o bien, que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral, deberán ser pagadas al área encargada de la administración del Instituto, en un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación; si la parte infractora no cumple con su obligación, el órgano electoral dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, se deducirá el monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento público que le corresponda.

3. Para la imposición del medio de apremio debe estar acreditado el incumplimiento del sujeto vinculado a alguna de las determinaciones de la Secretaría Ejecutiva, la Comisión o cualquiera de los órganos del Instituto, y es necesario que previamente se hubiere notificado el acuerdo en el que se establezca el apercibimiento, precisando que en el supuesto que no se desahogue en tiempo y forma lo requerido, se le aplicará una de las medidas de apremio previstas en el presente artículo.

El incumplimiento podrá ser declarado en cualquiera de los acuerdos que la Secretaría Ejecutiva, la Comisión o el órgano desconcentrado correspondiente dicten durante el procedimiento y en consecuencia aplicar las medidas de apremio que corresponda.

4. De ser procedente la aplicación de cualquiera de los medios de apremio contenidos en las fracciones III y IV del párrafo primero del presente artículo, se dirigirá a las autoridades competentes para que procedan a su aplicación.

5. Los medios de apremio podrán ser aplicados a las partes, sus representantes, y, en general, a cualquier persona, con el propósito de hacer cumplir las determinaciones de los órganos sustanciadores o resolutores, actuando de manera colegiada o unitaria.

6. Si la conducta asumida pudiese constituir algún delito, la Secretaría Ejecutiva, a través de quién se determine, instrumentará el acta correspondiente, misma que se hará del conocimiento de la autoridad competente, para que proceda conforme a derecho. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del órgano resolutor de ordenar las vistas correspondientes al resolver las quejas o denuncias presentadas.

7. Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como a las autoridades, las y los notarios públicos, los medios de apremio se aplicarán sin perjuicio de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse.

8. Con independencia de los medios de apremio que se puedan imponer para ser eficaces las determinaciones dictadas, se dará inicio del procedimiento sancionador que corresponda por la afectación a las normas de orden público derivado del incumplimiento o contumacia del sujeto obligado.

CAPÍTULO X

De los informes que rinde la Secretaría Ejecutiva

Artículo 33. De los informes que se rinden al Consejo General.

1. En cada sesión ordinaria del Consejo, la Secretaría Ejecutiva rendirá un informe de todas las quejas y denuncias presentadas ante los órganos del Instituto y de aquéllas iniciadas de oficio. Dicho informe incluirá:

- I. La materia de las quejas y denuncias y, en su caso, el tipo de procedimiento que se inició;

II. El órgano del Instituto en que se tramitaron (a nivel central o desconcentrado) y, en su caso, si fueron remitidas al Tribunal Electoral;

III. La mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de desechamiento o sobreseimiento;

IV. Una síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación; y

V. Su resolución y en su caso, los recursos presentados en su contra; la indicación de si éstos ya fueron resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente.

2. Con la misma periodicidad, la Secretaría Ejecutiva rendirá un informe de todas las solicitudes de medidas cautelares formuladas, que incluirá:

I. La materia de la solicitud de adopción de medidas cautelares, precisando quien la solicitó.

II. El tipo de procedimiento en que se tramitó la queja o denuncia en que se solicitó la adopción de medidas cautelares;

III. La mención de la decisión que, en su caso, tome la Secretaría Ejecutiva sobre el turno de la solicitud;

IV. La indicación de si las medidas cautelares fueron o no concedidas;

V. En caso que se hayan concedido las medidas cautelares, el cumplimiento de éstas; y

VI. En su caso, los recursos presentados en su contra; la indicación de si éstos fueron resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente.

3. Para efectos de lo anterior, las presidencias de los Consejos comunicarán de inmediato a la Secretaría Ejecutiva sobre la recepción, trámite y resolución de las quejas o denuncias, o recursos presentados en sus respectivos ámbitos de competencia, mediante el sistema electrónico o digital institucional que se determine para tal efecto. El informe deberá cumplir con los requisitos previstos en los párrafos anteriores, además de las respuestas, comunicaciones y solicitudes que no hayan sido atendidas.

Artículo 34. De los informes que se rinden a la Comisión.

1. En cada sesión ordinaria de la Comisión, la o el Secretario Ejecutivo rendirá un informe de todas las quejas o denuncias presentadas ante los órganos del Instituto y de aquellos procedimientos iniciados de oficio, que hayan sido tramitados, y que contendrá:

I. Fecha de presentación de las quejas o denuncias;

II. Materia de las mismas y, en su caso, el tipo de procedimiento que correspondió;

III. Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si recayó en ella un acuerdo de desechamiento o de sobreseimiento;

IV. Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación;

V. Su resolución y, en su caso, los recursos presentados en su contra, la indicación de si éstos ya fueron resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente; y

VI. Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral, precisando las fechas en que se notificó tal remisión; así como aquellos casos en que fueron devueltos por el Tribunal Electoral y el trámite que se dio a los mismos.

2. Con la misma periodicidad, la o el Secretario Ejecutivo rendirá un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares concedidas, y en su caso, de las acciones realizadas ante el incumplimiento de las mismas

TÍTULO TERCERO **De las Medidas Cautelares**

Artículo 35. Reglas de procedencia.

1. Las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas por:

I. La Comisión, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva; y

II. Los órganos desconcentrados en sus respectivos ámbitos de competencia, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la o el Presidente respectivo.

2. Para tal efecto, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día.

3. Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento.

4. La solicitud de adopción de medidas cautelares deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentarse por escrito y estar relacionada con una queja o denuncia;

II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada y de la cual se pretenda hacer cesar; y

III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar.

5. Cuando las solicitudes sean presentadas ante los órganos desconcentrados y la materia de la petición verse sobre la presunta colocación de propaganda fija a través de pintas de bardas, espectaculares así como cualquier otra diferente a radio o televisión, el órgano desconcentrado correspondiente determinará la investigación conducente sobre la petición de mérito, o conforme a lo dispuesto en los lugares prohibidos para difundir propaganda como lo dispone la Legislación Electoral.

Artículo 36. De la notoria improcedencia.

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando:

- I. La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el párrafo 4 del artículo anterior;
- II. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar;
- III. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y
- IV. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la propaganda materia de la solicitud.

2. En los casos de notoria improcedencia previstos en las fracciones I y IV anteriores, la Secretaría Ejecutiva, efectuando una valoración preliminar al respecto, podrá desechar la solicitud sin mayor trámite, lo que notificará por oficio a la o el Titular de la Comisión, y a la persona solicitante de manera personal.

Artículo 37. Del trámite.

1. Si la solicitud de adoptar medidas cautelares no actualiza una causal de notoria improcedencia, la Secretaría Ejecutiva, una vez que, en su caso, haya realizado las diligencias conducentes y después de haber admitido la queja o denuncia, la remitirá inmediatamente con las constancias recabadas y un proyecto de Acuerdo a la Comisión para que ésta resuelva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.

2. El Acuerdo que ordene la adopción de medidas cautelares deberá contener las consideraciones fundadas y motivadas acerca de:

- I. La prevención de daños irreparables en las contiendas electorales; y
- II. El cese de cualquier acto o hecho que pueda entrañar una violación o afectación a los principios rectores o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.

3. El acuerdo en que se determine la adopción de medidas cautelares establecerá la suspensión inmediata de los hechos materia de la misma, otorgando en su caso un plazo no mayor a 48 horas, atendiendo la naturaleza del acto para que los sujetos obligados la atiendan.

4. El acuerdo por el que se declare procedente la adopción de una medida cautelar se deberá notificar a las partes, en términos de lo establecido en la Ley Electoral y el Reglamento.

Artículo 38. Del incumplimiento.

1. Cuando la Secretaría Ejecutiva tenga conocimiento del probable incumplimiento de alguna medida cautelar ordenada por la Comisión, dará inicio a un nuevo procedimiento para la investigación de estos hechos, o los podrá considerar dentro de la misma investigación, o bien, podrá imponer el medio de apremio que estime suficiente para lograr el cumplimiento de la medida ordenada.

2. Para tales fines, los órganos y áreas del Instituto darán seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, e informarán a la Secretaría Ejecutiva y a la Consejería Titular de la Comisión, de cualquier incumplimiento.

Artículo 39. De las medidas cautelares tramitadas por los órganos desconcentrados.

1. Los órganos desconcentrados dictarán las medidas cautelares pertinentes, para lo cual atenderán al procedimiento y plazos señalados en el presente capítulo.

2. Dentro del Proceso Electoral, quien preside el Consejo, con apoyo de las Secretarías correspondientes, formulará el proyecto y lo propondrá al Consejo.

Artículo 40. De las medidas cautelares, tratándose de propaganda en radio y televisión, en asuntos de competencia exclusiva de los Organismos Públicos Locales.

1. Cuando la autoridad electoral local haya dado inicio al procedimiento sancionador por violaciones a una norma electoral local, si advierte la necesidad de adoptar una medida cautelar en materia de radio o televisión, remitirá su solicitud a la Unidad Técnica del Instituto Nacional Electoral.

2. La solicitud de medidas cautelares deberá contener los siguientes requisitos:

I. Identificación de la o el promovente;

II. Argumentos que acrediten su interés jurídico;

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y en su caso, un correo electrónico o número de fax;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que basa su solicitud, manifestando la posible afectación a los valores y principios que rigen la materia electoral; y

V. En su caso, las pruebas que acrediten la razón de su dicho.

3. La solicitud de la autoridad electoral local, deberá contener una valoración de los contenidos de los materiales denunciados a la luz de la legislación local presuntamente violada, en términos del párrafo 2, del artículo 40 de este Reglamento. Valoración que no será vinculante.

Artículo 41. De la integración emergente de la Comisión para el dictado de medidas cautelares.

1. En caso que haya ausencia de algún Consejero o Consejera Electoral por cuestiones de trabajo, enfermedad, recesos o alguna otra causa de fuerza mayor o caso fortuito que motive la misma, y no sea posible conformar la integración completa de la Comisión para efectos de sesionar sobre asuntos relacionados con la solicitud de adopción de medidas cautelares, se tomarán las providencias siguientes:

a) La Consejería titular de la comisión que esté presente, localizará a las o los ausentes, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva; les comunicará de la necesidad de celebrar una sesión para el efecto de determinar medidas cautelares y les convocará en el mismo acto. De la misma manera, la convocatoria y, en su caso, los oficios de localización que se giren, se adjuntarán como anexo en la minuta que se elabore del desarrollo de la sesión;

b) De no ser posible la localización o comunicación con quienes integran la

Comisión, la Consejería titular de la comisión, convocará a uno o dos Consejeras o Consejeros que no sean miembros de la Comisión para que participen por única ocasión con voz y voto en dicha sesión.

El quórum de dicha sesión se tomará con las y los miembros presentes;

c) La Consejería titular de la comisión, asentará en actas los hechos relatados en los incisos anteriores.

d) En caso de ausencia de la Consejería Titular de la comisión, la Presidencia del Consejo General designará a la o el Consejero Electoral integrante de la Comisión que se encargará de presidir por esa única ocasión la sesión que se trate, con las responsabilidades que correspondan en términos de convocatoria, como son conducción de la sesión, votaciones, firma de acuerdos y remisión de los expedientes a quienes corresponda, tanto por las medidas cautelares tomadas como las propias de archivo y transparencia.

2. Cuando las condiciones técnicas lo permitan, la asistencia podrá ser de carácter virtual o remota, a través de las tecnologías de la información y comunicación para que de manera remota o a distancia, sin contar con el elemento presencial en el lugar, de alguno de las o los consejeros electorales integrantes de la Comisión, permitan la transmisión simultánea de su voz e imagen, conforme a lo siguiente:

a) La asistencia virtual o remota sólo podrá realizarse cuando habiéndose llevado a cabo las acciones previstas en el párrafo anterior, resulte necesario que la Comisión emita medidas cautelares y no exista quórum para sesionar; y

b) Para la instrumentación de la asistencia remota, se atenderá a lo siguiente:

I. La asistencia podrá llevarse a cabo de manera virtual, a través de un esquema de videoconferencia u otras herramientas de informática o telemática similares que permitan analizar, plantear y discutir en tiempo real, los puntos del orden del día aprobados por la Comisión;

II. La asistencia virtual o remota deberá garantizar los principios de simultaneidad y deliberación de los asuntos de la Comisión;

III. El registro de asistencia de carácter virtual se verificará mediante firma electrónica de las o los consejeros electorales integrantes de la Comisión;

IV. Las sesiones de las comisiones a las que se ocurra mediante la asistencia virtual serán videograbadas para los efectos procedimentales conducentes; y

V. La convocatoria para quienes por circunstancias extraordinarias asistan de formar virtual, deberá señalar fecha y hora, debiéndose acompañar el proyecto de orden del día y se remitirá vía correo electrónico con la información soporte del asunto que se desahogará al interior de la Comisión, precisando que dicha información remitida en soporte informático estará disponible en un micrositio o red interna del Instituto, debiendo mediar acuse de recepción de la Consejería Electoral que sea convocada por esta vía.

3. En todo caso, la Consejería Electoral que vaya a ausentarse, deberá avisar con anticipación a la Consejería Titular de la comisión para los efectos conducentes. En caso de que quien se ausente sea ésta última, el oficio deberá dirigirlo a la Presidencia del Consejo General.

TÍTULO CUARTO

Del Procedimiento Sancionador Ordinario

CAPÍTULO I

Disposiciones Especiales

De los requisitos del escrito de queja o denuncia

Artículo 42. Requisitos del escrito inicial de queja o denuncia.

1. El escrito inicial de queja o denuncia deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Nombre de quien presenta la queja o denuncia, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personalidad;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que base su queja o denuncia, los preceptos presuntamente violados; y

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando la o el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas.

2. La parte quejosa o denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos narrados en su escrito inicial de queja o denuncia.

3. En caso de que las y los representantes de los partidos políticos, aspirantes a candidatura, precandidata o precandidato, candidata o candidato, no acrediten su personalidad, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.

Este último requisito no será exigible tratándose de las y los representantes acreditados ante el Consejo General y ante los Consejos.

CAPÍTULO II

De la presentación de una queja

Artículo 43. Las Quejas pueden ser presentadas por cualquier persona, conforme a lo siguiente:

1. Cualquier persona, física por su propio derecho o moral a través de su legítimo representante, podrá presentar queja o denuncia por escrito, en forma oral (comparecencia), o por medio del correo electrónico oficial de la Secretaría Ejecutiva: secretaria@ieesinaloa.mx, derivadas de presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos del Instituto.

2. Cuando la queja o denuncia sea presentada mediante escrito o por medio de comunicación electrónica, deberán ser ratificadas dentro de los tres días siguientes al de su presentación, ante el personal autorizado del Instituto. En caso de no acudir a ratificar la queja o denuncia dentro del término de tres días contados a partir de que se le notifique la citación, se tendrá por no formulada.

3. Se harán constar en actas las quejas o denuncias que sean presentadas por comparecencia y por medios de comunicación electrónicos.

4. Las quejas o denuncias por comparecencia no requerirán ser ratificadas.

5. En el procedimiento sancionador ordinario iniciado a instancia de parte, todas las quejas o denuncias se tendrán por recibidas; se les considerará además de recibidas por formuladas a las que sean ratificadas. Se tendrán por presentadas las que contengan todos los requisitos legales.

Artículo 44. De la materia y procedencia.

1. El procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que no sean materia del procedimiento especial sancionador.

Artículo 45. Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario.

1. La queja o denuncia será desecheda de plano, cuando:

I. El denunciado sea un partido o una agrupación política que, con anterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro. Con independencia de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva, investigará los hechos, y de acreditarse la probable responsabilidad de un sujeto distinto, iniciará el procedimiento correspondiente.

II. La o el denunciado no se encuentre dentro de los siguientes sujetos:

- a) Los partidos políticos;
- b) Las y los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;
- c) Las y los ciudadanos o cualquier persona moral;
- d) Las y los observadores electorales y organizaciones de observadores electorales;
- e). Las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público;
- f). Las y los notarios públicos;
- g). Las y los extranjeros;
- h). Las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que pretendan formar un partido político;
- i). Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como quienes los integran o dirigen, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos;
- j). Las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o culto; y
- k). Las y los demás sujetos obligados en los términos de la presente ley.

III. La queja y denuncia resulte frívola.

2. La queja o denuncia será improcedente cuando:

- I. Versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, y la parte quejosa o denunciante no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico;
- II. La o el quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido denunciado si la queja o denuncia versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna;
- III. Por actos o hechos imputados a la misma persona, que hayan sido materia de otra queja o denuncia, cuya resolución sea definitiva;
- IV. El Instituto carezca de competencia para conocerlos, o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la normativa electoral. En este caso, se dará vista a la autoridad que resulte competente;
- V. Haya prescrito la facultad del Instituto para fincar responsabilidades;

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

- I. Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia;
- II. El denunciado sea un partido político o una agrupación política que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro;
- III. La o el quejoso presente escrito de desistimiento, debidamente ratificado ante la Secretaría Ejecutiva, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Secretaría y que a juicio de ésta, o por el avance de la investigación, no se trate de imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.
- IV. El fallecimiento de la o el sujeto a quien se atribuye la conducta denunciada.

Artículo 46. Prescripción para fincar responsabilidades

1. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en tres años:

- I. El término de la prescripción se empezará a contar a partir de la fecha en que hayan ocurrido los presuntos hechos conculcatorios de la normativa comicial local, a partir de que se tenga conocimiento de los mismos, o bien, tratándose de actos continuados a partir de cuándo cese su comisión; y
- II. La presentación de una queja o denuncia o el inicio oficioso de un procedimiento sancionador por parte de esta autoridad, interrumpe el cómputo de la prescripción.

Artículo 47. Previsiones.

1. Ante la omisión de los requisitos de queja o denuncia como:

- I. Nombre de la o el quejoso, con firma autógrafa o huella digital;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad;
- IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja y de ser posible, los preceptos presuntamente violados; y
- V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando la o el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas.
- VI. Relacionar las pruebas con los hechos narrados en su escrito de queja.

La Secretaría Ejecutiva, prevendrá a la o el denunciante para que los subsane o aclare dentro del plazo improrrogable de tres días. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la queja o denuncia.

2. En el caso que se omita señalar domicilio para recibir notificaciones o el señalado se encuentre fuera de la sede del órgano resolutor, éstas se harán por Estrados.

3. Tratándose de quejas o denuncias frívolas, no procederá prevención.

Artículo 48. Plazo de investigación.

1. Admitida la queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva, emplazará al denunciado, corriéndole traslado con una copia de la queja, así como de las pruebas que haya aportado el quejoso o las que la autoridad a prevención hubiere obtenido, concediéndole 5 días para que conteste lo que a su derecho convenga.

2. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital;
- II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce;
- III. Domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede del órgano sustanciador y, en su caso, una dirección de correo electrónico válida, en caso de solicitar la recepción de notificación electrónica;

En caso de que el domicilio señalado no sea en la ciudad sede del órgano sustanciador o bien, que no señale domicilio ni correo electrónico las notificaciones se practicarán por Estrados.

IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad; y,

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionarlas con los hechos; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá acreditar que dichas pruebas fueron solicitadas con anterioridad a la presentación de la queja e identificarlas con toda precisión.

3. La Secretaría ejecutiva se allegará de elementos de convicción que estime pertinente para integrar el expediente respectivo. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la recepción de la queja o denuncia, o del inicio de oficio.

4. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia la Secretaría Ejecutiva valora que deben dictarse medidas cautelares, se acordará lo conducente a fin de lograr que cesen los actos o hechos que constituyan infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la Ley Electoral.

5. La Secretaría Ejecutiva, excepcionalmente por una sola vez, podrá ampliar el periodo de investigación hasta por otro periodo de cuarenta días, siempre que las dificultades que presente la investigación así lo requieran. En el acuerdo respectivo, deberán expresarse las razones que acompañan tal determinación.

Artículo 49. Alegatos.

1. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Secretaría Ejecutiva, pondrá el expediente a la vista de la parte quejosa y de la o el denunciado para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.

CAPÍTULO III De la Resolución

Artículo 50. Elaboración del proyecto de Resolución.

1. Concluido el periodo de alegatos, la Secretaría Ejecutiva, formulará el proyecto de Resolución correspondiente, en un término no mayor a diez días contados a partir del desahogo de la última vista. Dicho plazo podrá duplicarse siempre que dicha Secretaría lo justifique en el acuerdo correspondiente.

2. Dentro de los tres días posteriores a su elaboración, la Secretaría Ejecutiva, remitirá el proyecto de Resolución a la Consejería Titular de la Comisión, para su conocimiento y estudio.

Artículo 51. Sesión de resolución.

1. A más tardar el día siguiente de su recepción, la Consejería Titular de la Comisión convocará a sesión de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución, misma que tendrá lugar no antes de veinticuatro horas de la fecha de la convocatoria.

Artículo 52. Valoración de la Comisión: aprobación del proyecto o devolución del mismo.

1. La Comisión dictaminará el proyecto de resolución conforme a lo siguiente:

I. Si el proyecto se aprueba en los términos propuestos por la Secretaría Ejecutiva, será turnado a la Presidencia del Consejo General, quien convocará en un plazo que no exceda de cinco días a sesión, remitiendo copias del proyecto a quienes integran dicho órgano por lo menos tres días antes de celebrarse;

II. Si el proyecto es rechazado, la Secretaría Ejecutiva elaborará el engrose correspondiente conforme a las argumentaciones vertidas en la sesión. En caso que el rechazo se deba a deficiencias en la investigación, el asunto se regresará a la Secretaría Ejecutiva, para que lleve a cabo las diligencias pertinentes, y una vez agotadas, deberá presentar el nuevo proyecto dentro de los quince días posteriores a que ello ocurra; y

III. Los proyectos se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos.

2. En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Pleno del Consejo General determinará:

I. Aprobarlo en los términos que se le presente.

II. Aprobarlo con modificaciones, ordenando a la Secretaría Ejecutiva, realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría.

III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del dictamen.

IV. Rechazarlo y ordenar a la Secretaría Ejecutiva, elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría.

Rechazado un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución.

Artículo 53. Disposiciones especiales en materia de resoluciones del Consejo General.

1. Si el proyecto es rechazado por el Consejo, lo regresará a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que lo reformule conforme con los razonamientos expuestos en la sesión.

De requerirse la realización de nuevas diligencias, la Secretaría Ejecutiva procederá en términos de lo dispuesto en la fracción II del párrafo 1, del artículo anterior, con la salvedad de que, en este caso, el proyecto lo presentará directamente al Consejo General para su discusión y aprobación.

2. Las diligencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán atender a los principios de razonabilidad, eficacia y proporcionalidad, debiéndose realizar en un plazo prudente, dentro de la vigencia de la facultad sancionadora de la autoridad.

3. Si la queja resulta infundada, se ordenará la suspensión de las medidas cautelares que se hayan adoptado.

Artículo 54. Contenido del Proyecto de Resolución.

1. El Proyecto de Resolución deberá contener:

I. Encabezado: Incluirá la leyenda "CONSEJO GENERAL" y debajo de éste, el número de expediente;

II. Proemio, que incluya, por separado:

a) Título integrado con las siguientes partes:

i. Indicación de que se trata de una resolución dictada por el órgano correspondiente;

ii. Datos de identificación del expediente, la o el quejoso y la o el denunciado.

En caso de haberse iniciado por una vista o de oficio, así indicarlo; y

iii. Lugar y fecha.

III. Resultandos: Una narrativa concreta, clara y detallada de:

a) Los antecedentes del caso, narrados en orden cronológico, atendiendo al principio de pertinencia de la información; y

b) Las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento, incluidas la fecha en que se presentó la queja o denuncia, los hechos denunciados y las diligencias decretadas durante la instrucción, hasta la formulación del anteproyecto, la sesión de la Comisión, y la aprobación del proyecto en el Consejo General.

IV. Parte considerativa:

a) Competencia;

b) En su caso, el análisis de las causales de improcedencia, sobreseimiento y desechamiento que se hagan valer, o las que se detecten de oficio. De no estar en alguno de tales supuestos, este considerando deberá obviarse, entendiéndose que la queja o denuncia satisface los requisitos de procedencia; y

c) Análisis de los hechos: se estudiarán los planteamientos de la o el denunciante y las defensas de la o el denunciado, a la luz de las pruebas que obren en el sumario, para constatar la existencia de los hechos denunciados y la actualización de la infracción.

V. Individualización de la sanción. De acreditarse la infracción, se impondrá la sanción que corresponda, atendiendo a los siguientes criterios:

- a) Tipo de infracción;
- b) Bien jurídico tutelado;
- c) Singularidad o pluralidad de la conducta; y
- d) Circunstancias de tiempo, modo y lugar.
- e) Las condiciones socioeconómicas del infractor;
- f) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
- g) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento obligatorio;

VI. Resolutivos, en los que se precise:

- a) Sentido de la resolución;
- b) Sanción decretada, en su caso;
- c) Plazo para el cumplimiento, en su caso; y
- d) Vista a la autoridad competente, cuando se advierta la presunta comisión de una infracción diversa a la investigada, o cuando el Instituto no sea competente para sancionar a la parte infractora.

VII. Finalmente, se asentará si el proyecto se aprobó por unanimidad o mayoría, y se glosarán los votos particulares, concurrentes o razonados que se hayan presentado.

2. En lo que corresponda, los proyectos que la Secretaría Ejecutiva presente a la Comisión, deberán reunir los requisitos previstos en el párrafo 1 de este artículo.

CAPÍTULO IV

De los procedimientos que implican vistas

Artículo 55. Objeto.

1. El presente capítulo regula el procedimiento sancionador ordinario para el conocimiento de las presuntas faltas cometidas por cualquier servidora o servidor público, notarias o notarios públicos, organización de ciudadanas o ciudadanos que pretendan formar un partido político,

extranjeras o extranjeros, ministras o ministros de culto, asociaciones vinculadas a iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta.

Artículo 56. Trámite a cargo de la Secretaría Ejecutiva.

1. Cuando se denuncie o se presuma la comisión de infracciones a la normativa electoral cometidas por las o los sujetos referidos en el artículo anterior, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente.
2. Para efectos de la integración del expediente a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría Ejecutiva llevará a cabo las diligencias que estime conducentes para recabar la información, pruebas y documentos vinculados con la presunta infracción. Si de los documentos recabados y/o exhibidos por la o el quejoso se advierten elementos suficientes para presumir una infracción a la Ley Electoral, instaurará un procedimiento sancionador ordinario.
3. Concluida la investigación correspondiente, la Secretaría Ejecutiva elaborará un proyecto de Resolución en el que determinará si existe una infracción a la normativa electoral por parte de las o los sujetos referidos. Dicho proyecto será sometido a la consideración de la Comisión, y posteriormente al Consejo General los términos y plazos previstos en el Reglamento.
4. Si el Consejo General determina que no existen infracciones a la normativa electoral por parte de las o los sujetos denunciados, ordenará el archivo del expediente, pero si determina su existencia, ordenará su remisión con la resolución dictada a las autoridades competentes de las o los servidores públicos federales, estatales o municipales que incumplan las disposiciones de la Ley Electoral.
5. La vista que se deba hacer se realizará a través de la Secretaría Ejecutiva.
6. Las faltas a que se refiere el presente capítulo podrán ser conocidas por la Secretaría Ejecutiva, de oficio o a petición de parte agraviada.

Artículo 57. De la obligación de las autoridades de rendir un informe.

1. Las dependencias a las cuales les sean remitidas las constancias que se refiere el artículo anterior, tienen la obligación de comunicar a la Secretaría Ejecutiva, en el plazo conferido para tal efecto, las medidas adoptadas en aquellos casos de presuntas infracciones de las que se les hubiese informado.

TÍTULO QUINTO
Del Procedimiento Sancionador Especial.

CAPÍTULO I
Disposiciones Especiales

De los requisitos del escrito de queja o denuncia

Artículo 58. Requisitos del escrito inicial de queja o denuncia.

- I. Nombre de quien presenta la queja o denuncia, con firma autógrafa o huella digital;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad;
- IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia;
- V. Ofrecimiento y exhibición de pruebas; o la mención de las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y,
- VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

Artículo 59. Procedencia.

1. Cuando se trate de la comisión de conductas realizadas dentro del proceso electoral, que transgredan:
 - I. El incumplimiento, por parte de las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobiernos municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público, al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, cuando tal conducta pudiere afectar la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las y los aspirantes, precandidaturas o candidaturas durante los procesos electorales locales;
 - II. Las normas sobre propaganda política o electoral; y
 - III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Artículo 60. Causales de desechamiento.

1. La queja o denuncia será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva sin prevención alguna, cuando:
 - I. No reúna los siguientes requisitos:
 - a) Nombre de la o el quejoso, con firma autógrafa o huella digital;
 - b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
 - c) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad;
 - d) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia;

e) Ofrecimiento y exhibición de pruebas, o la mención de las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y

f) En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

II. Los hechos denunciados no constituyan de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo;

III. La o el quejoso no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos;

IV. La materia de la queja o denuncia resulte irreparable.

V. La queja o denuncia sea evidentemente frívola; y

2. En caso de desechamiento, la Secretaría Ejecutiva notificará a la parte quejosa o denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance, dentro del plazo de doce horas, tal resolución deberá ser confirmada por escrito.

La Secretaría Ejecutiva contará con un plazo de veinticuatro horas para emitir el acuerdo de admisión o la propuesta de desechamiento, contado a partir del momento en que reciba la queja. En caso de que se requiera realizar diligencias de investigación respecto de los hechos denunciados, el plazo para la admisión o propuesta de desechamiento de la queja será de setenta y dos horas, contado a partir del momento en que reciba la queja, dentro del cual deberán de agotarse dichas diligencias.

Artículo 61. De la admisión y el emplazamiento.

1. La Secretaría Ejecutiva admitirá la queja o denuncia dentro de las veinticuatro horas posteriores a su recepción, siempre que satisfaga los requisitos previstos en la Ley Electoral.

2. Si del análisis de las constancias aportadas por la o el quejoso, se advierte la falta de indicios suficientes para iniciar la investigación, la Secretaría Ejecutiva dictará las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación preliminar, atendiendo al objeto y al carácter sumario del procedimiento, debiendo justificar para tal efecto su necesidad y oportunidad. En este caso, el plazo para la admisión se computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios, sin que este plazo exceda las setenta y dos horas.

3. Admitida la queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva, sin perjuicio de realizar las diligencias que estime necesarias, emplazará a la o el quejoso y a la o el denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar en el plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a que se haya notificado el emplazamiento.

En dicho emplazamiento se le hará saber a la parte denunciada la infracción que se le imputa, para lo cual se le correrá traslado de la queja o denuncia con sus anexos. Y en su caso, de las diligencias e investigaciones realizadas por la autoridad.

4. Si se solicita la adopción de medidas cautelares, o la Secretaría Ejecutiva considera necesaria su adopción, se procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 37 de este Reglamento.

Artículo 62. Audiencia de pruebas y alegatos, y remisión del expediente al Tribunal Electoral.

1. La audiencia de pruebas y alegatos se desarrollará en los siguientes términos:

I. Se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría Ejecutiva y/o personal autorizado, debiéndose levantar constancia de su desarrollo, en la que firmarán los que en ella intervinieron;

II. Para el desahogo de la audiencia, los partidos políticos, aspirantes a candidatura, precandidata o precandidato, las y los candidatos independientes, personas morales o instituciones públicas, podrán acreditar a un representante;

III. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados;

IV. La o el quejoso y la o el denunciado podrán comparecer a la audiencia por medio de representantes o apoderados, en los términos del Código Civil para el Estado de Sinaloa, quienes deberán presentar los documentos que los acrediten al inicio de la audiencia y en el acta se asentará razón de esa circunstancia;

V. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz a la o el quejoso o denunciante a fin de que, en una intervención no mayor a quince minutos, exponga sintéticamente el hecho que motivó la queja o denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio lo corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría Ejecutiva actuará como quejosa o quejoso o denunciante;

VI. Acto seguido, se dará el uso de la voz a la o el denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la queja o denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza.

VII. La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo; y

VIII. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría Ejecutiva concederá en forma sucesiva el uso de la voz a la o el quejoso y a la o el denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita, o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno. Culminada esta etapa, se cerrará el acta y se dará por terminada la audiencia.

IX. Si por causa grave o de fuerza mayor, hubiere necesidad de diferir la audiencia, la Secretaría Ejecutiva, lo hará fundando y motivando tal determinación, debiendo de reanudar la misma a la brevedad posible.

Artículo 63. Del turno del expediente y del informe circunstanciado.

1. Concluida la audiencia, la Secretaría Ejecutiva remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Electoral, junto con un informe circunstanciado que deberá satisfacer los siguientes requisitos:

- I. Narrar sucintamente los hechos denunciados, y las infracciones a que se refieran;
- II. Indicar las medidas cautelares y diligencias decretadas con motivo de la instrucción, relacionándolas con los hechos que se pretenden acreditar;
- III. Las pruebas aportadas por las partes y las recabadas durante la investigación; y
- IV. Las conclusiones sobre la queja o denuncia que consistirán en una exposición breve respecto de los hechos denunciados, las pruebas ofrecidas y el resultado de su desahogo, así como las diligencias realizadas en el curso de la instrucción, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

2. El informe circunstanciado quedará a disposición de las y los Consejeros para su consulta. Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto para su conocimiento.

CAPÍTULO II

Del procedimiento ante los órganos desconcentrados

Artículo 64. Del procedimiento ante los órganos desconcentrados.

1. La tramitación del procedimiento sancionador especial promovido con motivo de la comisión de conductas referidas a la ubicación física o contenido de propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas, o cualquier otra distinta a la transmitida por radio o televisión, o bien denuncie actos anticipados de precampaña o campaña y que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda, se estará a lo siguiente:

- I. La denuncia o queja se presentará ante la Presidencia del Consejo que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada o del cargo que se elija;
- II. La Presidencia de dicho Consejo ejercerá las facultades que en el tema tiene asignada a la Secretaría Ejecutiva, informando a dicha autoridad de inmediato acerca de la presentación del escrito correspondiente; y
- III. Celebrada la audiencia, la o el Presidente del Consejo correspondiente deberá turnar al Tribunal Electoral de forma inmediata el expediente completo, haciendo referencia a las diligencias practicadas acompañándolas con un informe circunstanciado que rinda en términos de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 65. Facultad de atracción.

1. Los procedimientos sancionadores especiales, podrán ser atraídos por la

Secretaría Ejecutiva en cualquier momento procedimental previo a su remisión al Tribunal Electoral, si la conducta denunciada constituye una infracción generalizada o reviste gravedad.

2. Se entenderá por infracción generalizada, aquélla conducta que implique la extensión de sus efectos a la mayoría de la población con repercusión en una contienda electoral, a través de la sistematicidad de actos en diferentes lugares y durante la misma temporalidad.

3. Se entenderá que reviste gravedad una conducta, cuando se aprecie de manera inminente una afectación directa en el desarrollo de un Proceso Electoral.

4. La Secretaría Ejecutiva y otros órganos que reciban la queja o denuncia atenderán a lo siguiente:

I. En caso que la queja o denuncia sea presentada en el Instituto, si la Secretaría Ejecutiva determina que debe atraer el asunto, avisará de dicha determinación al Consejo atinente, dentro de las veinticuatro horas siguientes;

II. Si la Secretaría Ejecutiva determina no ejercer la facultad de atracción, remitirá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la queja o denuncia al Consejo competente a efecto de que el órgano desconcentrado sustancie el procedimiento;

III. Si la queja o denuncia se presenta ante los órganos desconcentrados, éstos de inmediato darán aviso de su interposición a la Secretaría Ejecutiva; y

IV. En caso de solicitar la atracción, lo podrán realizar a través de dicho medio.

5. Cuando la solicitud de atracción la presente el denunciante, se deberá acordar sobre la procedencia o no de la misma.

6. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 1 de este artículo, la Secretaría Ejecutiva podrá atraer los procedimientos cuando:

I. La conducta denunciada haya ocurrido en dos o más distritos electorales;

II. Los hechos denunciados se hayan cometido por servidores públicos;

III. La propaganda denunciada calumnie en términos de lo dispuesto por la Ley Electoral;

IV. La propaganda denunciada sea de carácter religioso; y

V. La propaganda denunciada se coloque o difunda en medios impresos estatales.

CAPÍTULO III

Del Procedimiento Sancionador Especial por actos de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Artículo 66. Este capítulo regula el procedimiento a que se refiere el artículo 303 Bis de la Ley Electoral en relación con las conductas infractoras que contempla el artículo 280 Bis de la misma ley, las cuales corresponden a infracciones por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Artículo 67. Principios y Garantías aplicables para la atención de víctimas.

Además de los principios a los que se encuentran sujetos todos los procedimientos sancionadores en materia electoral, en cuestión de hechos que constituyen infracciones por violencia política contra las mujeres en razón de género el procedimiento se llevará respetando los siguientes principios y garantías:

a) Buena fe: Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarlas o responsabilizarlas por su situación y deberán brindarles los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

b) Dignidad: Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar la autonomía de las personas, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

c) Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y diligencias dentro de este procedimiento en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable o discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en todo momento la revictimización.

d) Coadyuvancia: Forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales.

e) Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos personales contenidos en las quejas o denuncias en trámite.

f) Personal cualificado: A fin de garantizar el óptimo desarrollo del procedimiento y la protección de las víctimas, los procedimientos serán sustanciados por personas capacitadas y sensibilizadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.

g) Debida diligencia: La sustanciación de los casos se llevará a cabo con celeridad y adoptando las medidas necesarias, con perspectiva de género, para la investigación de los hechos, con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente los derechos políticos y electorales de las partes o hacer inejecutable la resolución final que se emita.

h) Imparcialidad y contradicción: El personal que sustancie el procedimiento se mantendrá ajeno a los intereses de las partes en controversia y dirigirá los conflictos sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, garantizando un trato justo. Todas las personas que intervengan en el procedimiento deberán actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Las partes podrán conocer, controvertir o

confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.

i) Prohibición de represalias: Garantía a favor de las personas que presenten una denuncia o queja, que comparezcan para dar testimonios o que participen en una investigación relacionada con violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de no sufrir afectación a su esfera de derechos.

j) Colaboración: Todas las personas que sean citadas en el transcurso de la aplicación de este procedimiento tienen el deber de implicarse y de prestar su colaboración.

k) Exhaustividad: Durante la tramitación del procedimiento, la Unidad Técnica debe solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad resolutora los elementos necesarios para una adecuada valoración del caso.

El proceso de recopilación de información debe efectuarse con perspectiva de género, celeridad, eficacia, confidencialidad, sensibilidad, y con respeto a los derechos de cada una de las personas.

l) Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

m) Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Artículo 68. Metodología para actuar con perspectiva de género. En todos los casos se deberá realizar un análisis para verificar si existen situaciones de violencia por cuestiones de género, para lo cual se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

a) Identificar si existen situaciones de poder o un contexto de desigualdad estructural que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;

b) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;

c) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visualizar dichas situaciones.

d) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, evaluar el posible impacto diferenciado y en su caso, buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género.

e) Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas y,

f) Evitar en todo momento el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

Artículo 69. El escrito inicial de queja para denunciar actos de violencia política contra las mujeres en razón de género deberá cumplir los requisitos que señala el numeral 58 de este Reglamento.

Se agrega como ANEXO 1 al presente reglamento, una guía orientadora para presentar una queja.

Artículo 70. Prevención de la queja o denuncia, suplencia de la deficiencia de la queja y consentimiento de la víctima.

1. Prevención de la queja o denuncia:

a) Ante la omisión de los requisitos señalados en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 58, la Secretaría Ejecutiva prevendrá a la persona denunciante para que, en un plazo improrrogable de dos días, contados a partir de su notificación, los subsane o aclare las circunstancias de modo, tiempo y lugar. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la queja o denuncia. La falta de pruebas sólo será causa para prevenir a la persona denunciante, cuando realizadas y desahogadas todas las diligencias necesarias al alcance de la Secretaría Ejecutiva, no se obtengan los elementos suficientes para iniciar el procedimiento correspondiente.

b) La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia, ya sea en forma oral o por medios de comunicación telefónica u electrónicos, deberá hacerlo constar en acta, para tal efecto, deberá solicitar los medios de identificación y localización necesarios. Hecho lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento inmediato a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta proceda a localizar y prevenir a la persona quejosa o denunciante para que acuda a manifestar su consentimiento en un plazo de tres días contados a partir de la notificación, apercibido que, de no hacerlo así, se tendrá por no presentada.

2. Suplencia de la deficiencia de la queja:

a) En los casos que regula el presente Reglamento procederá la suplencia de la deficiencia de la queja, siempre que exista una narración clara y precisa de los hechos denunciados para iniciar la investigación y tramitar el procedimiento, respetando en todo tiempo el debido proceso y la igualdad entre las partes.

En casos de personas en donde exista la intersección de una condición adicional de vulnerabilidad además de la de género, la suplencia de la queja será total.

3. Consentimiento de la víctima:

a) La queja o denuncia podrá ser presentada por la víctima o víctimas, o por terceras personas, siempre que se cuente con el consentimiento de las mismas.

Este último supuesto podrá acreditarse mediante cualquier elemento que genere certeza a la autoridad instructora de la voluntad de la víctima de dar inicio al procedimiento, como poder notarial, carta poder simple firmada por dos personas testigos, comparecencia ante cualquier órgano del Instituto dotado de fe pública, llamada telefónica, correo electrónico, video llamada, entre otros.

b) En caso de no presentarse ningún elemento que permita corroborar el consentimiento de la víctima, la autoridad instructora podrá requerirla en un plazo de 24 horas, para que, en el plazo concedido para tal efecto, manifieste si es o no su intención dar inicio al procedimiento correspondiente, otorgándole la facultad de presentar los elementos de prueba que estime pertinentes.

En el supuesto de que no se cuente con los referidos elementos, se tendrá por no presentada la queja o denuncia.

c) Podrá iniciarse el procedimiento especial de manera oficiosa, siempre y cuando la víctima sea informada y consienta dicha acción. Para tal efecto, se le requerirá para que manifieste su consentimiento en un plazo de dos días contados a partir de la notificación. En caso de no desahogar tal requerimiento, no se podrá dar inicio al procedimiento respectivo.

No será necesario dicho consentimiento siempre y cuando se trate de la protección de derechos colectivos e intereses difusos.

Artículo 71. Las medidas cautelares que pueden determinarse en los procedimientos sancionadores especiales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género son:

- I. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
- II. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
- III. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
- IV. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
- V. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite.

Para elaborar un análisis de riesgo, la Secretaría Ejecutiva solicitará la colaboración de Secretaría General de Gobierno para que por su conducto se instruya a las instituciones que resulten competentes y, en consecuencia determine un plan de seguridad.

Artículo 72. Cuando la Comisión advierta que existe riesgo de seguridad, integridad física o la vida de la persona en situación de violencia, emitirá Acuerdo solicitando a la Presidencia realizar la petición a las autoridades competentes para que dicte las Medidas de protección ya sea de emergencia, preventivas o de naturaleza civil a que se refiere el título Cuarto de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.

TÍTULO SEXTO

De las Procedimientos por Responsabilidades de las Servidoras y los Servidores Públicos

CAPÍTULO I

De los procedimientos por infracciones cometidas por el personal del Instituto

Artículo 73. Cuando el personal del Instituto cometa alguna infracción a las disposiciones de la Ley Electoral, los procedimientos correspondientes se tramitarán en los términos que señalen los ordenamientos legales aplicables y de los procedimientos que se sigan ante la Contraloría Interna del Instituto.

En caso de que el personal que cometa alguna infracción sea miembro del Servicio Profesional Electoral se sujetará a los procedimientos en los términos que señale el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, con independencia de lo que señale los ordenamientos legales aplicables y de los procedimientos que se sigan ante la Contraloría Interna del Instituto.

CAPÍTULO II

De las Sanciones aplicadas a las Presidencias y Consejerías de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto.

Artículo 74. Las sanciones que imponga la Secretaría Ejecutiva con motivo de la aplicación de los Lineamientos para la Sanción y Remoción de Presidencias y Consejerías de Consejos Distritales y Municipales del Instituto, podrán ser revisadas a petición de parte interesada por la Comisión, bajo el procedimiento siguiente:

1. La persona sancionada podrá interponer ante la Consejería Titular de la Comisión, un escrito de revisión en un plazo no mayor a 4 días contados a partir de la notificación.

I. El escrito deberá contar con:

- a) Nombre y cargo de la persona que promueve;
- b) Señalar domicilio en la ciudad de Culiacán y autorizar a las personas que considere conveniente para efectos de la notificación a que haya lugar;
- c) Expresar los motivos de agravio que le causa la resolución de la Secretaría Ejecutiva.
- d) Firma autógrafa o huella digital;

2. La Consejería Titular comunicará al resto de sus integrantes de Comisión del escrito presentado y procederá a requerir a la Secretaría Ejecutiva para que en un plazo de 48 horas entregue copia certificada de todas las actuaciones que obren en el expediente incoado a la persona promovente;

3. La Consejería Titular de la Comisión integrará un procedimiento de Revisión de Sanción, otorgando un número de identificación en términos del artículo 15 del presente reglamento, y procederá a elaborar una propuesta de resolución.

4. Dentro de los 3 días siguientes a la integración del expediente, la Consejería Titular convocará a sesión de la Comisión para presentar el proyecto de resolución y proceder a discutirlo a fin de aprobarlo, modificarlo o cambiar el sentido propuesto.

Las resoluciones de los procedimientos de revisión a que se refiere este apartado, podrán confirmar, revocar o modificar la sanción impuesta por la Secretaría Ejecutiva.

La resolución será notificada tanto a la Secretaría Ejecutiva como a la persona promovente dentro del término de 2 días siguientes a aquel en que se haya dictado dicha resolución.

Artículo 75. Los acuerdos de desechamiento por improcedencia o por sobreseimiento que dicte la Secretaría Ejecutiva en las quejas contra Presidencias y Consejerías, podrán ser objeto de procedimiento de revisión por parte de la Comisión siempre que la persona que haya promovido la queja manifieste por escrito su intención de que se revise tal determinación.

El escrito debe reunir los requisitos a que se refiere el inciso a) de la fracción I del artículo anterior.

La Consejería titular de la comisión procederá a tramitarlo conforme a lo señalado en las fracciones II, III y IV del artículo anterior.

La resolución al procedimiento de revisión contenido en este artículo, podrá confirmar o revocar el acuerdo de desechamiento y, en su caso, ordenar la instauración del procedimiento a que se refieren los Lineamientos para la Sanción y Remoción de Presidencias y Consejerías de Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Artículo 76. De otras autoridades.

1. Se considerará que las autoridades han incumplido su obligación de proporcionar información al Instituto en tiempo y forma cuando una vez realizado el apercibimiento respectivo:

I. No respondan en los plazos establecidos en el requerimiento de información;

II. No informen en los términos solicitados, o

III. Nieguen la información solicitada.

Asunto: Se presenta Queja por actos que Constituyen Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA**

_____ (Nombre completo), por propio derecho, (en caso de que actúe en representación de una tercera persona señalar en nombre de quién, acreditando tal carácter), con número telefónico a efecto de ser localizada (o) con prontitud el _____ (este requisito es optativo), señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en las calles de _____; como datos de correo electrónico para notificaciones electrónicas el siguiente _____ y autorizando para tales efectos a _____ (nombre completo de las personas autorizadas), indistintamente, ante esta autoridad, comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito, y en atención a lo dispuesto los artículos 1°, 4, 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1° y 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; artículos 11, 16, 18, 19, 22, 24 Bis C, 25, 38, 42, 43 párrafo cuarto y 44 de la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Sinaloa; y artículos 2 fracción XII, 69 primer párrafo, 271 fracción VII, 272 fracción XIV, 293 bis, 293 Bis A, y 303 Bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, vengo a denunciar a _ _ (señalar nombre completo y en caso de ser funcionario público, precisar el cargo y dependencia a la que pertenece), con quien tengo una relación de _____ (de ser el caso, señalar el tipo de relación) por lo comisión de hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres por razón de género.

Para hacerlo, fundo mi queja en las siguientes consideraciones de hecho y Derecho.

HECHOS

Se debe realizar una narración clara de los hechos que se consideran constitutivos de violencia política por razón de género, señalando circunstancias de modo (cómo sucedió), tiempo (cuándo sucedió) y lugar (en dónde sucedió).

1. El día ___ (fecha en que ocurrieron los hechos que se denuncian), estando presentes en _____ (lugar en donde sucedieron los hechos), el denunciando llevó a cabo las siguientes acciones en contra de mi persona por el hecho de ser mujer, ya que _____ (narración de los actos u omisiones que generó la posible violación a sus derechos políticos-electorales por razón de género. Es necesario señalar si se realizó en un solo acto, en diversas ocasiones y si se continúa perpetrando).

Ejemplo:

1. El cinco de febrero de dos mil diecisiete, estando presentes en la oficina de XXX, ubicada en las calles de XXX, el denunciado me agredió verbalmente al señalar que para qué pedía información del registro de candidaturas a Diputada, si yo en lo que me debo de interesar es conseguirme un marido, casarme y darle hijos, porque las *mujeres no sirven para esto de la política, esto es cosa seria, muy delicada, es decir, son cosas de hombres*".
2. Mantas en diversas ubicaciones de la ciudad que aluden a mi persona como candidata, en las que señalan que yo solo haré lo que mi marido me indique y no podré tomar las decisiones importantes que requiere el cargo para el que me postulo"
- 3.
4.
5.

Los hechos narrados han causado una afectación en la suscrita, toda vez que _____ (señalar qué derechos considera han sido dañados o vulnerados y que afectación ha tenido en su persona, bienes o de sus familiares).

MEDIDAS CAUTELARES¹

De acuerdo a las consideraciones que han sido narradas en la presente denuncia, y con fundamento en el artículo 293 Bis de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, solicito se decreten de inmediato las siguientes medidas cautelares:

(Aquí dependerá del hecho que se narra para que en correspondencia se pida la medida cautelar). (La presente lista es enunciativa, no limitativa y constituye un ejemplo de las medidas que se pueden solicitar).

- I. El retiro de propaganda colocada en espectaculares, en los que se utiliza un lenguaje excluyente y sexista que impide el libre ejercicio de los derechos político-electorales de la suscrita.
- II. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
- III. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
- IV. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;

¹ Tienen como finalidad detener los hechos u actos que constituyen: la posible infracción denunciada, la producción de daños irreparables, o se ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral o en el ejercicio del cargo.

- V. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y
- VI. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN²

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 310 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos comprendidos en el Título Cuarto de la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Sinaloa ; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7, inciso f), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); 2, apartado d), y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículo 13, fracción I, de la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Sinaloa; , y de acuerdo a las consideraciones que han sido narradas en la presente denuncia, solicito se decrete de inmediato las siguientes medidas de protección:

(Señalar las medidas que requiera se decreten a efecto de prevenir mayores daños, entre otros:)

- I. *Prohibición de acercarse a determinada distancia de la presunta víctima;*
- II. *Prohibición de comunicarse con la víctima;*
- III. *Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o lugar determinado;*
- IV. *La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;*
- V. *La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o a personas relacionadas con ella;*
- VI. *Protección policial de la víctima o de su domicilio;*
- VII. *Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se encuentre la víctima en el momento de solicitarlo; y*
- VIII. *Traslado de la víctima a refugios o albergues temporales, así como de sus familiares.*

(La presente lista es enunciativa, no limitativa y constituye un ejemplo de las medidas que se pueden solicitar).

A efecto de acreditar lo anterior, se ofrecen los siguientes elementos de convicción:

PRUEBAS

² Se solicitan cuando su seguridad, vida, integridad o libertad sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o ejercicio de sus derechos (incluyendo a sus familiares o víctimas potenciales), con la finalidad de prevenir mayores daños y que sean irreparables.

Las pruebas deben ofrecerse señalando el tipo de prueba, en qué consiste, qué se pretende acreditar y relacionarla con los hechos controvertidos.

1. LA CONFESIONAL. Prueba que se ofrece en términos del artículo 291, párrafo 3 de la LIPES y que corre a cargo de _____ (señalar quien la desahoga), misma que consta en la fe de hechos notarial número _____, levantada ante la o el Notario Público número _____ con ejercicio en _____ (señalar en dónde ejerce funciones el Notario), el día _____ (señalar fecha del instrumento notarial).

Con esta prueba pretendo acreditar que la persona denunciada ha ejercido violencia en contra de la suscrita, consistente en _____ (síntesis de los hechos que se pretenden acreditar con esta prueba).

Esta prueba la relaciono con los hechos marcados con los números _____ de la presente denuncia.

2. LA TESTIMONIAL. Prueba que se ofrece en términos del artículo 291 párrafo 3 de la LGIPE y que corre a cargo de _____ (señalar quién la desahoga), misma que consta en el instrumento notarial número _____, levantado ante la o el Notario Público número _____ con ejercicio en _____ (señalar en dónde ejerce funciones el Notario), el día _____ (señalar fecha del instrumento notarial).

Con esta prueba pretendo acreditar que la persona denunciada ha ejercido violencia en contra de la suscrita, consistente en _____ (síntesis de los hechos que se pretenden acreditar con esta prueba).

Esta prueba la relaciono con los hechos marcados con los números _____ de la presente denuncia.

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA (Privada). Consistente en el _____ (señalar tipo de documento que se ofrece: oficio, resolución, acta, acuerdo, etc.), identificado bajo el (folio o número), de fecha _____, por medio del cual el _____ (autoridad que lo emite), señala que _____ (describir acto que contiene el documento).

Con esta prueba pretendo acreditar _____ (realizar un razonamiento de lo que se acredita con dicha documental).

Esta prueba la relaciono con los hechos marcados con los números _____ de la presente denuncia.

Existen casos en que la violencia se desarrolla en lugares cerrados, sin testigos y sin pruebas documentales, video-grabaciones o cualquier otra que permitan acreditar su comisión, en dichos casos, siempre que se considere que existe una afectación psicológica; cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estime determinante para el esclarecimiento de los hechos denunciados, se podrá ofrecer la prueba pericial, como sigue:

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a la suscrita consistente en los razonamientos lógico- jurídicos que realice esa autoridad.

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las constancias que integran el expediente y que favorezcan a la suscrita.

DERECHO

Marco normativo internacional

Los artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dentro del Sistema universal de Derechos Humanos; los artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; preámbulo, artículos 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará).

Marco normativo nacional

Los artículos 1°, 4, 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1° y 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; artículos 6, 11, 14, 15, 16, 18, 20 Bis, 20 Ter, 21, 27, 48 Bis, 52, fracción II, y 60 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; además del el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con perspectiva de género y el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género.

Marco normativo estatal

Los artículos 11, 16, 18, 19, 22, 24 Bis C, 25, 38, 42, 43 párrafo cuarto y 44 de la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Sinaloa y artículos 2 fracción XII, 69 primer párrafo, 271 fracción VII, 272 fracción XIV, 293 bis, 293 Bis A, y 303 Bis de la Ley de Instituciones y procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, el Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género para el Estado de Sinaloa.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta H. Secretaría Ejecutiva; atentamente se sirva:

ÚNICO. Tenerme por presentada en los términos de este escrito, con las copias simples que se acompañan, denunciando a _____ (señalar el nombre (s) de las personas denunciadas) todas y cada una de las prestaciones que se hacen valer en el capítulo respectivo.

PROTESTO LO NECESARIO

Culiacán Rosales, Sinaloa, a _____ de _____ de 2020.

Nombre y firma de quien presenta
la queja

(En caso de no poder firmar huella digital)

Dada la delicadeza del tema y la necesidad de tomar medidas urgentes, se solicitan los siguientes datos a efecto de lograr una pronta localización de la quejosa.

Nombre Completo	
Candidatura o puesto	
Si pertenece a algún grupo étnico, comunidad indígena o grupo de atención prioritaria (especifique cuál)	
Teléfono y/o correo electrónico	
Domicilio en donde pueda ser localizada	

